

[El trasfondo político de la crisis chilena](#)

3 de agosto de 2020

Desde que brotó la pandemia del covid 19, un importante proceso político de nuestra región que venía programado para abril de este año se aplazó para octubre: el referéndum que modificaría la constitución chilena (ver [Lampadia: ¿Una nueva constitución en Chile?](#)).

Ahora, con la crisis encima, nuestro vecino del sur se encuentra ensimismado en discusiones políticas absurdas que no solo no contribuyen a mejorar la gestión de gobierno en lo económico y sanitario - fragmentando más al país - sino que amenazan con acrecentar permanentemente la cuota de poder del Estado en su economía (ver [Lampadia: La política en bancarrota](#)).



Guardando las distancias, el Perú se encuentra pasando por algo similar, siendo víctima de un desbordado populismo por parte del Congreso que amenaza con generar un quiebre en nuestro modelo económico hacia las elecciones de abril del 2021 (ver [Lampadia: Un peligroso populismo se cierne en el Perú](#)).

Estos riesgos de cambio de régimen de desarrollo pueden seguir sucediendo en toda la región, a propósito del cambio que han sufrido las políticas - de un enfoque liberal hacia un mayor intervencionismo en los mercados - que ha suscitado la misma pandemia, por lo que debemos estar alertas de cómo evolucionarán y si es que se harán inmutables en el mediano plazo. Algo que sería nefasto para las economías, cuando más libertades económicas deben darse para gatillar la recuperación en los próximos años.

Veamos el análisis que hace The Economist a la crisis chilena y cómo se ve proyectado el futuro político de Chile si el presidente Piñera, así como buena parte de los partidos liberales de este país, siguen cediendo a las presunciones de las izquierdas más radicales. [Lampadia](#)



El covid-19 acelera los cambios en el modelo de economía de mercado de Chile

Bajo la presión de la crisis de salud, el país puede volverse más socialdemócrata.

The Economist

18 de julio, 2020

Traducida y comentada por [Lampadia](#)

En una esquina de la calle en El Bosque, un barrio pobre de Santiago, Dixa Contreras sirve porotos con riendas («frijoles con riendas»: es decir, sopa de frijoles y espagueti) de una olla grande. Un muchacho toma suficiente para una familia de cuatro, enferma en casa con covid-19. Contreras y seis ayudantes ofrecen 250 comidas gratis al día, y pan fresco cada dos días para la noche una vez (té). Vecinos, tiendas, puestos en el mercado semanal de productos y EPES, una organización benéfica, proporcionan la comida.

Las cocinas de sopa como estas han aparecido en todo Chile desde que se produjo la pandemia en marzo. Fueron vistas por última vez durante una

recesión a principios de la década de 1980, cuando Augusto Pinochet, un dictador, gobernó el país. Ayudada por las políticas pro mercado que introdujo Pinochet, la economía creció rápidamente en los años posteriores a su partida en 1990, aunque últimamente el ritmo se ha desacelerado. Le dieron al sector privado un papel importante en la provisión de pensiones, educación y atención médica. La tasa de pobreza de Chile cayó del 45% a mediados de la década de 1980 al 8.6% en 2017, según la encuesta socioeconómica bianual del gobierno. En los años posteriores a Pinochet, Chile ganó una reputación de buena gestión económica, niveles relativamente bajos de corrupción e instituciones estables.

Incluso antes del covid-19 su reputación sufrió un golpe. Las pensiones, que los chilenos ahorran para sí mismos, fueron más bajas de lo que muchos esperaban cuando se introdujo el plan en 1980. Los chilenos acomodados obtuvieron una mejor atención médica y educación que los pobres. Las manifestaciones masivas y a veces violentas contra la desigualdad comenzaron en octubre pasado y se disiparon solo con el inicio de la pandemia. Obligaron a Sebastián Piñera, el presidente de centroderecha, a prometer más gasto social y un referéndum, que se celebrará en octubre, sobre si se debe reescribir la constitución, que se basa en la que Pinochet dejó el país. «Existe un consenso de que el estado necesita brindar más y mejores servicios públicos de calidad», dice Rodrigo Vergara, ex presidente del Banco Central. La pandemia y la intervención del gobierno que ha provocado pueden acelerar una evolución hacia la socialdemocracia que ya estaba en marcha.

El historial del gobierno en el manejo de la pandemia ha sido mixto. Como parte de su población, los 321,205 casos confirmados de Chile y las 7,186 muertes se encuentran entre las más altas del mundo. En lugar de bloquear a todo el país, el gobierno simplemente cerró los epicentros del covid-19. Comenzó a hablar de un regreso a una «nueva normalidad» a mediados de abril, antes de que la enfermedad alcanzara su punto máximo. El gobierno impuso un bloqueo total de la capital, donde vive un tercio de la población, solo el 15 de mayo. «Es una historia de arrogancia», dice Eduardo Engel, director de Espacio Público, un think tank

El gobierno mitigó esas fallas haciendo muchas pruebas (una razón por la cual su carga de trabajo se ve tan grande). Ha aumentado la cantidad de ventiladores y camas de cuidados intensivos. El cierre de la capital, seguido de un endurecimiento de las restricciones en las áreas en cuarentena, finalmente ha llevado a una disminución en el número de casos nuevos a nivel nacional.

El gobierno espera que el PBI se contraiga un 6.5% este año. Esa es la mayor disminución desde la recesión en 1982-83 (aunque es más pequeña que el promedio regional esperado). La tasa de desempleo promedio de marzo a mayo alcanzó el 11.2%, su nivel más alto desde que comenzó la actual forma de calcularlo en 2010. Es probable que la tasa de pobreza alcance el 15% este año, dice Dante Contreras, economista de la Universidad de Chile.

Los vecindarios densos, las casas estrechas y la necesidad de tomar el transporte público fomentan la propagación del covid 19 entre los pobres. El ministro de salud, Jaime Mañalich, admitió en mayo que no sabía cuánta pobreza y hacinamiento hay en partes de Santiago, lo que hace que el gobierno parezca despistado. Renunció.

El gobierno ha sido torpe en proteger a los chilenos de los estragos económicos del covid-19. Ha actuado lentamente. Sus medidas, aunque grandes, no han satisfecho la necesidad. Su baja reacción podría causar una reacción violenta que se equivoca en la dirección opuesta.

El primer paquete para proteger el empleo, las pequeñas empresas y los hogares pobres, presentado en marzo, tiene un valor de US\$ 17,000 millones, casi el 7% del PBI. (Algunos se otorgan en forma de préstamos y, por lo tanto, no se cuentan como gastos presupuestarios). Incluye un plan de baja, que permite a los trabajadores obtener un seguro de desempleo mientras mantienen formalmente sus trabajos, además de efectivo y cajas de alimentos para los más pobres. Pero el apoyo que brindaron a las familias fue menor que la línea oficial de pobreza. Las protestas estallaron en barrios pobres. Los activistas proyectaron la palabra hambre en la torre de Telefónica en Santiago. Bajo presión, el gobierno llegó a un acuerdo con los partidos de oposición el 14 de junio para gastar US\$ 12,000 millones adicionales en dos años.

Siguió con un paquete de US\$ 1,500 millones para la clase media, que incluye aplazamientos de pagos de hipotecas y préstamos sin intereses. Los chilenos de clase media estaban enojados porque gran parte de la ayuda consistía en préstamos. Para calmarlos, el 14 de julio el gobierno ofreció nuevamente un refuerzo tardío: una entrega única de US\$ 632 a los trabajadores formales cuyos ingresos han disminuido.

Los gobiernos posteriores a Pinochet en su mayoría han mantenido bajos los déficits presupuestarios. Este año, el gobierno espera que el déficit alcance el 9.6% del PBI, el nivel más alto en casi 50 años. Su gasto es pasar del 24% del PBI en 2019 a alrededor del 30% este año.

Si Piñera se salía con la suya, el gasto podría retroceder. Pero su mandato finaliza a principios de 2022. Las protestas y la pandemia lo han debilitado. El papel del gobierno será determinado por su sucesor y, si los chilenos lo respaldan, por una asamblea constitucional. Es probable que cambie. Los llamados a un estado más activo por parte de la izquierda ahora se hacen eco de los políticos de la derecha, como Joaquín Lavín, el alcalde de un próspero distrito de Santiago, que puede convertirse en el próximo presidente. En su apoyo a los beneficios sociales, como las viviendas de bajos ingresos, suenan más como demócratas cristianos europeos que como liberales del laissez-faire.

Existe un amplio acuerdo de que los ingresos fiscales deben aumentar del 20% del PBI. Ya, en respuesta a las protestas del año pasado, el gobierno aumentó la tasa impositiva para los ingresos más altos. El nuevo ministro de salud, Enrique Paris, un tecnócrata, favorece un límite a las ganancias de las aseguradoras de salud privadas, aunque esta no es una política del gobierno.

La ira popular inspira ideas más radicales. La rebelión contra la primera versión del paquete de ayuda de la clase media llevó a una propuesta en el Congreso para permitir a los chilenos retirar el 10% de sus ahorros de pensiones para ayudarlos a superar la pandemia. Eso reduciría los beneficios futuros, que los chilenos ya consideran demasiado bajos o, lo que es más probable, obligaría al gobierno a cerrar el hoyo, a un costo de al menos US\$ 16,500 millones. De cualquier manera, si se aprueba el proyecto de ley, se debilitaría una institución central del modelo chileno. [El retiro de 10% fue aprobado por ambas cámaras y promulgado por el presidente]. Algunos miembros de la coalición de Piñera se unieron a la oposición para respaldarla. El dinero extra para los trabajadores formales era una forma de recuperarlos. También lo fue la promesa de Piñera de «cirugía mayor» para el sistema de pensiones. No está trabajando. El 15 de julio, la cámara baja del Congreso aprobó el proyecto de ley y lo envió al Senado.

Tal radicalismo plantea un riesgo. La mayoría de los chilenos está de acuerdo en que el estado debería actuar para reducir la desigualdad y elevar a los necesitados. Pero su enojo podría crear apoyo para las políticas populistas que harían al país más pobre. El éxito de la reinvencción de Chile «dependerá de si el sistema político es capaz de establecer límites», dice Vergara. El próximo grupo de líderes tendrá que hacerlo mejor que los actuales.

Lampadia